ALGUNOS ASPECTOS JURÍDICO-MERCANTILES TRAS EL CONCURSO DE FAGOR

Arantza Martínez Balmaseda

Profesora Adjunta de Derecho Mercantil
EUE Empresariales de Vitoria-Gasteiz
Universidad del País Vasco (EHU-UPV)

RESUMEN

El trabajo que se presenta tiene por objeto analizar la situación de las cooperativas en Euskadi, centrando nuestra atención en el emblema de la Corporación Mondragón, esto es, el caso de Fagor Electrodomésticos S. Coop. A este fin, se analizan algunas cuestiones de especial importancia o interés desde la perspectiva jurídico mercantil de la entidad en concurso, como por ejemplo, las consecuencias que sobre el patrimonio de los socios puede comportar la entrada en concurso de la cooperativa o las consecuencias derivadas de la suscripción de aportaciones financieras subordinadas por los socios cooperativistas.

PALABRAS CLAVE: Cooperativas, Fagor Electrodomésticos S. Coop, socios cooperativistas, aportaciones financieras subordinadas.

A FEW ASPECTS OF COMMERCIAL LAW FOLLOWING THE FAGOR INSOLVENCY

ABSTRACT

The paper sets out a view about the cooperatives in the Basque country, especially in relation to the Mondragon Corporation and its flagship, the Fagor Electrodomésticos, S. Coop. In this sense, we analyze some important questions, as for example the consequences of the Fagor's bankruptcy on cooperatives partners' assets and the subordinated financial contributions issued by Fagor.

KEY WORDS: Cooperatives, Fagor Electrodomésticos S. Coop, Cooperatives-partners, subordinated financial contributions.

ECONLIT: K10, K29, P13.

SUMARIO¹

1. Introducción. 2. La legislación autonómica de cooperativas 3. El surgimiento de la Corporación de Mondragón y el caso de Fagor Electrodomésticos: crisis económica y política de internacionalización de la entidad. 4. Análisis de algunos aspectos jurídico-mercantiles tras el concurso de Fagor. 4.1. Responsabilidad de los socios por las pérdidas de la sociedad. 4.2. Responsabilidad limitada o ilimitada. 4.3. Las aportaciones financieras subordinadas Fagor. 5. Conclusión. Bibliografía.

1. Introducción

El impacto que las cooperativas de Euskadi tienen en su economía ha convertido a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) en un referente a nivel internacional en relación con el modelo de gestión socialmente responsable de estas fórmulas societarias². No obstante, y como es sabido, la crisis económica que desde hace años sufre nuestro país ha afectado a uno de los emblemas del cooperativismo vasco. En este sentido, la empresa Fagor electrodomésticos S. Coop., con sede en Arrasate-Mondragón anunciaba el día 16 de octubre de 2013 su entrada en preconcurso de acreedores, al acumular una deuda muy elevada, y que finalmente, acabó por materializar una declaración de concurso el día 15 de noviembre del mismo año. La apertura de este procedimiento concursal ha causado un gran impacto, fundamentalmente porque la misma constituía el emblema del proyecto cooperativista iniciado en nuestro entorno más cercano a mediados del pasado siglo. En este sentido, y como es conocido, el cierre de esta entidad ha originado una indudable preocupación en Euskadi, puesto que, por una parte, son muchos los empleos –directos e indirectos– que se ven afectados por la nega-

1. Trabajo elaborado en el marco del Grupo de Investigación financiado por el Gobierno Vasco (IT862-13) y cuyo investigador principal es el Prof. Alberto Emparanza Sobejano.

2. INNOBASQUE: INNOBASQUE (Agencia Vasca de la Innovación): *RSE y Competitividad en Euskadi. Una aproximación desde la innovación social*, Innobasque ed., Zamudio, 2011, p. 157. En este estudio se señala que el número de empresas cooperativas en Euskadi representa el 0,7% del total, concentrando un 4,8% del empleo en la CAV.

tiva de la corporativa Mondragón a financiar Fagor, pero también porque desde la perspectiva de las ideas y principios que inspiran el cooperativismo, ha caído un referente importante. Durante las últimas semanas muchas han sido las voces que aludían como causa de la caída de Fagor Electrodomésticos a la imposibilidad manifiesta que supone competir en el mercado de electrodomésticos a nivel internacional, en pugna con otras marcas que a nivel de calidad son similares pero su coste de producción inferior. Dicho de otro modo, parece que la complejidad que supone la internacionalización de las empresas de economía social cuando se enfrentan a la necesidad de acomodarse al mercado capitalista ha podido originar la crisis prolongada de la empresa y su actual situación.

En este contexto, nuestro propósito a lo largo de las siguientes páginas es el de analizar algunos aspectos, jurídico-mercantiles, que se derivan de la situación creada en esta empresa, si bien situándola en un contexto algo más amplio, como es el de ofrecer un recorrido por el cooperativismo vasco, de la mano de su emblema más representativo, como es el de la corporación de Mondragón en su conjunto³. A este fin, dedicaremos las primeras páginas a describir –de manera somera– la normativa sobre cooperativas en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), para a continuación realizar una breve aproximación del surgimiento de la corporación de Mondragón y en particular, analizar el proceso de internacionalización de la empresa Fagor Electrodomésticos, puesto que, como se señalaba con anterioridad, las decisiones adoptadas a ese nivel parece que han llevado a la empresa al cierre definitivo de la misma. La finalidad de todo ello es la de trasladar al lector una serie de datos generales acerca de esta cooperativa en particular para, con posterioridad, abordar algunas cuestiones que consideramos de interés. Así, por ejemplo, hemos creído oportuno acercarnos a dos cuestiones de enorme envergadura en estos momentos, cuales son, por una parte, el análisis de la afectación de la apertura del concurso sobre los socios-cooperativistas de la entidad en relación con su patrimonio personal, teniendo en cuenta que si bien la ley proclama la responsabilidad limitada del socio cooperativista por las deudas la ley establece también la responsabilidad de éste por las pérdidas no quedando claro si esta responsabilidad es limitada o ilimitada. En concreto, además, se analizará la situa-

3. Lo arriba indicado no obsta para recordar que la experiencia cooperativista en Euskadi no se reduce a las cooperativas de trabajo asociado, aunque es cierto que éstas constituyen desde la perspectiva del empleo las más significativas. Entre ellas, sin ningún género de duda, son las cooperativas de Mondragón las más relevantes.

ción creada respecto de las aportaciones financieras subordinadas porque la entrada en concurso de la entidad hace que resulte muy difícil recuperar el dinero a los titulares de aportaciones financieras subordinadas por el carácter subordinado que presenta este producto financiero.

2. La legislación autonómica de cooperativas

La experiencia de las cooperativas en Euskadi⁴ ha alcanzado una madurez empresarial que, entre otras, se ha basado en la numerosa normativa autonómica dictada a tal fin⁵, que fundamentalmente se circunscribe a las sociedades cooperativas, pero también a otras tipologías de empresas de economía social. Esta normativa ha sido adoptada sobre la base de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 3/1979, de 19 de diciembre (BOE nº 306, de 22 de diciembre), que aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco (artículos 10.23º, 20.6º, 41) (BOPV nº 32 de 12/01/1980).

Así, prescindiendo en estos momentos de la referencia a la normativa estatal, en Euskadi se comenzó regulando estas fórmulas societarias en el año 1982 (Ley 1/1982 sobre cooperativas de 11 de febrero), que se mantuvo en vigor hasta que pocos años después, en 1993, se dictó la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. Ésta última ha sido objeto de diversas modificaciones con posterioridad (Ley 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi y Ley 8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modifi-

4. A tal fin, véase el Consejo superior de cooperativas de Euskadi, instituido por la Ley 1/1982, de 11 de Febrero, sobre Cooperativas del País Vasco, constituyéndose formalmente el 28 de Enero de 1983. Sobre este órgano, véase <http://www.csce-ekgk.coop/>. Para un análisis histórico, véase CSCE-EKGK: *Historia del Consejo superior de cooperativas de Euskadi: 1983-2009*, http://www.csce-ekgk.coop/galeria/CSCE%20CAST_3nov.pdf.

5. Junto a las normas reseñadas, cabe asimismo referirse, con carácter particular, a la creación del Servicio Vasco de Resolución extrajudicial de conflictos en cooperativas (BITARTU) creado en el año 2004 [Reglamento, de 21 de septiembre de 2004, sobre procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas (BITARTU) (BOPV nº 81, de 21, de septiembre de 2004)], como entidad encargada de la administración de los diferentes procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas que puedan surgir entre éstas, o entre sus diferentes órganos sociales y sus socios, o en el seno de las mismas entre sus diferentes órganos sociales o entre los socios.

cación de la Ley de Cooperativas de Euskadi⁶), siendo la finalidad de las mismas la de adaptar la normativa autonómica a las necesidades contemporáneas de las cooperativas vascas. Por su parte, en el año 2000, se regularon las cooperativas de iniciativa social⁷ y en el año 2008, la sociedad cooperativa pequeña de Euskadi⁸.

3. El surgimiento de la Corporación de Mondragón y el caso de Fagor Electrodomésticos: crisis económica y política de internacionalización de la entidad

La corporación de Mondragón, como experiencia cooperativista en Euskadi y con una enorme importancia a nivel estatal y mundial en este sentido, surge en la localidad del mismo nombre en 1956, al amparo de una escuela profesional y de un pequeño taller de electrodomésticos, conocido en sus orígenes como Ulgor⁹. Como es sabido, las cooperativas y también la corporación de Mondragón, ha venido representando un modelo de empresa distinto a la empresa de capital, cuyos objetivos han sido económicos, pero también sociales. En este contexto, la aparición de las empresas cooperativas, cuyos principios de funcionamiento democrático y de participación los han erigido como modelos alternativos a las

6. En cuanto a las normas de desarrollo, vid. Decreto 58/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi (BOPV nº 73, de 19 de abril), modificado por Decreto 152/2006, de 18 de julio (BOPV nº 146, de 2 de agosto) y Decreto 64/1999, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos y requisitos relativos a las sociedades cooperativas de utilidad pública (BOPV nº 33, de 17 de febrero).

7. Decreto 61/2000, de 4 de abril, por el que se regulan las Cooperativas de iniciativa Social (BOPV nº 82, de mayo).

8. Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi (BOPV nº 127, de 4 de julio). Asimismo, Orden de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por el que se aprueba el modelo de solicitud y de certificación del órgano de Administración y representación para la presentación de las cuentas anuales de la Sociedad cooperativa pequeña de Euskadi (BOPV nº 29, de 12/02/2010). Orden de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por el que se aprueba el modelo orientativo de estatutos sociales de la Sociedad Cooperativa pequeña de Euskadi (BOPV nº 60, de 30/03/2010).

9. THOMAS, H./LOGAN, C., *Mondragón. Un análisis económico*, Madrid, 1991; GOMORRO, I., *Experiencia cooperativa en el País Vasco*, 1975, Bilbao; MOLINA, F., *Fagor Electrodomésticos. Historia de una experiencia cooperativa*, Mondragón, 2006; BRADLEY, K./GELB A., *Cooperativas en marcha*, Barcelona 1985.

empresas señaladas, han tenido, sin embargo, que enfrentarse a una realidad económica no exenta de contradicciones. En efecto, las cooperativas conviven en un mundo económico globalizado, lo cual ha provocado que para subsistir en este entorno hayan tenido que adoptar fórmulas de internacionalización o de multilocalización¹⁰. Este ha sido el caso de la Corporación de Mondragón¹¹, que siendo el primer grupo industrial vasco, ha venido optando por competir en los mercados internacionales utilizando estructuras de capital convencionales en el exterior que permitan asegurar su competitividad global¹². Esta realidad ha dado lugar a un buen número de trabajos en nuestro entorno que tienen por objeto analizar el futuro y los retos del cooperativismo vasco, en el sentido de mantener sus principios y orientaciones básicos y aunarlos con la necesidad de competir en el exterior adoptando, como se señalaba, estructuras de capital que difícilmente casan con el cooperativismo tradicional¹³. Sea como fuere, lo cierto es que mientras se resuelve si es posible o no el sostenimiento de las características que definen a las sociedades cooperativas en un escenario global, no es menos cierto que éstas tampoco han sido ajenas a los embates de la crisis económica que nos azota desde el año 2008¹⁴.

A este contexto general también se ha enfrentado Fagor Electrodomésticos S. Coop., que, como así se ha afirmado, constituye un caso que “*ilustra claramente*

10. LUZARRAGA, J.M e IRIZAR, I: La estrategia de multilocalización internacional de la Corporación de Mondragón, *Ekonomiaz* nº 79, 2012, pp. 115 y ss.

11. Vid. el trabajo de ERRASTI, A: “Euskal Dragoiak Erdiko Erresuman: Mondragon Taldeko Multinazionalak Txinan”, *Uztaro* nº 84, 2013, pp. 43-65.

12. LUZARRAGA, J.M e IRIZAR, I: La estrategia de multilocalización internacional..., loc. cit. p. 120 citando a URDANGARIN, C: “Internacionalización de Mondragónn Corporación Cooperativa”, *Ekonomiaz* nº 44, 1999, pp. 238-255 y CLAMP, C: “The Evolution of Management in the Mondragon Cooperatives” *Mapping Cooperative Studies in the Millenium*, University of Victoria, Victoria, 2003.

13. Sobre esta cuestión, por ejemplo, ERRASTI AMOZARRAIN, A.M: Modelos de empresa multinacional democrática o cooperativa”, *Cuadernos de Gestión* vol. 4, nº 2, 2004, pp. 13-29. También, ERRASTI, A.M, HERAS, I; ELGOIBAR, P y BEGIRISTAIN, A: “La internacionalización de las Cooperativas y su responsabilidad social”, *Revista de Dirección y Administración de Empresas* nº 10, 2002, pp. 119-145.

14. Para un estudio sobre las respuestas de la corporación de Mondragón ante la crisis, GARATE, J.I; LAFUENTE, J.L; MADINAGOITIA, J.L y SINDE, J.M: “Respuestas cooperativas a un escenario de crisis: el caso de la Corporación de Mondragón”, *Revista de Contabilidad y Dirección*, vol. 11, 2010, pp. 173-182.

la problemática a la que se enfrentan muchas cooperativas industriales para competir en mercados altamente concentrados e internacionalizados¹⁵". En efecto, la sociedad ya desde el año 1999 comienza una escalada en su política de expansión, adquiriendo y constituyendo sociedades filiales, en régimen de capital, transformando lo que en su momento era una pequeña sociedad cooperativa, que pertenece a los socios cooperativistas de Mondragón y Basauri en una multinacional. Así, por ejemplo, en el año 1999, Fagor adquirió la empresa Wrozamet, S.A de Polonia, fabricante de hornos y cocinas independientes; en el año 2002 participó como socio industrial en la adquisición de Brandt con plantas tanto en Francia, como en Italia¹⁶, aunque –poco después- en el año 2005 compró a Elco toda su participación en Brandt. Pero no sólo cuenta con filiales en Europa, sino también en África (Marruecos), en Sudamérica (Argentina) y en Asia (China). Lo anterior, ocasionó que Fagor Electrodomésticos S. Coop. se posicionará como el quinto grupo europeo en el sector¹⁷. El problema o dificultad manifiesta ante la que parece se ha encontrado Fagor es la de la alta competencia en un sector donde otros grupos producen electrodomésticos a un coste inferior y de mayor calidad, lo que le ha llevado a trasladar su producción a entornos donde los costes salariales son inferiores. Junto a ello, la crisis ha ahondado más en el mismo sentido, sin que la entidad pudiera tener vías alternativas a la de seguir creciendo en el exterior o la de rebajar costes, fundamentalmente, salariales por esta vía puesto que su condición de cooperativa le ha impedido, por ejemplo, ser absorbida por otra multinacional, lo que hubiera ocasionado la pérdida de su condición de cooperativa. Todos estos condicionantes brevemente anotados han llevado a la entidad a la situación que conocemos, originando una indudable preocupación entre los socios cooperativistas y también entre sus trabajadores asalariados en relación con el futuro que para su patrimonio y el mantenimiento del empleo les espera.

15. MENDIZABAL ETXABE, A; BEGIRISTAIN ZUBILLAGA, A y ERRASTI AMOZARRAIN, A: "Deslocalizaciones y empleo cooperativo. El caso de Fagor Electrodomésticos, S. Coop", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y cooperativa* nº 52, 2005, pp. 237-266. Una versión posterior en euskara y actualizada, MENDIZABAL, A; ERRASTI, A y ETXEZARRETA, E: "Lekualdatzeak eta enplegu kooperatiboa Fagor Elektrotresnak E. Koop.-ren ataka", *Uztaro* nº 57, 2006, pp. 11-37.

16. Seguimos en esta descripción, lo señalado en el trabajo de MENDIZABAL ETXABE, A; BEGIRISTAIN ZUBILLAGA, A y ERRASTI AMOZARRAIN, A: "Deslocalizaciones y empleo cooperativo. El caso de Fagor...", loc. cit. pp. 253-254.

17. MENDIZABAL ETXABE, A; BEGIRISTAIN ZUBILLAGA, A y ERRASTI AMOZARRAIN, A: "Deslocalizaciones y empleo cooperativo. El caso de Fagor...", loc. cit. pp. 253.

4. Análisis de algunos aspectos jurídico-mercantiles tras el concurso de Fagor

La entrada en concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos S.Coop, debido a su dimensión y complejidad, ha planteado cuestiones de especial importancia desde el punto de vista jurídico-mercantil y de enorme repercusión práctica de entre las que hemos considerado oportuno destacar dos. La primera de ellas se refiere a las dudas que se han generado en torno a la posible responsabilidad de los socios cooperativistas respecto de las pérdidas de la sociedad. Y en segundo lugar, abordaremos el conflicto surgido entre los adquirentes de las aportaciones financieras subordinadas emitidas por Fagor y que puede llegar a convertirse en un problema similar a las participaciones preferentes de las cajas de ahorro desde el momento en que la entrada en concurso de la entidad hace muy difícil la recuperación de la inversión para los titulares de este producto financiero.

4.1. Responsabilidad de los socios por las pérdidas de la sociedad

Una de las cuestiones de gran trascendencia que se ha planteado con la entrada en concurso de la cooperativa ha sido la interrogante generada en torno a una posible responsabilidad de los socios cooperativistas respecto de las pérdidas de la sociedad¹⁸. En este sentido, la duda se ha generado debido a que la ley vasca de

18. Con carácter general, BATALLER GRAU, J. (Dir.), *Pérdidas, disolución y concurso en sociedades cooperativas*, Madrid, 2012. Sobre el concurso y las relaciones jurídicas con sus socios, FAJARDO GARCÍA, I.G., “La masa activa y pasiva del concurso de cooperativas”, en *Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia*, t.V, Madrid, pp. 5235 y ss; PANIAGUA ZURERA, M., “La determinación y la distribución de los resultados del ejercicio económico en la Sociedad Cooperativa: propuestas de armonización legislativa”, *RdS*, 24, 2005, pp.199 y ss; GRIMALDOS GARCÍA, M.I., “El concurso de la cooperativa y su repercusión en el patrimonio personal de los socios”, *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, nº 11, 2009; ENCISO ALONSO MUÑUMER, M., “El concurso de acreedores de la cooperativa”, *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, nº 19, 2013; Sobre las cooperativas con carácter general, MORILLAS JARILLO, M.J/ FELÍU REY, M.I: *Curso de cooperativas*, Madrid, 2002, EMBID IRUJO, *Concentración de empresas y Derecho de cooperativas*, Murcia, 1991; “La integración cooperativa y su tratamiento en la Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi”, *Estudios de Derecho Mercantil homenaje al Profesor Justino Duque Domínguez*, I, Valladolid, 1998; DIVAR GARTEI-ZAURRECOA, J., *Régimen jurídico de las sociedades cooperativas*, Bilbao, 1987; ÍDEM, “El cooperativismo y la economía social en el País Vasco”, *C.I.R.I.E.C.*, nº 0, 1987, pp. 75 y ss; PENSA DÍAZ, B, *Manual de Derecho cooperativo*, Madrid, 1987; CABALLER MELLADO, V., “Reflexiones en torno al coopera-

cooperativas, por una parte, establece que los socios no responderán personalmente de las deudas sociales al estar su responsabilidad por dichas deudas limitada a las aportaciones al capital social que hubieran suscrito (art. 56.1) pero, por otra parte, señala la posibilidad de que los socios deban responder frente a la sociedad cooperativa por las pérdidas generadas (art. 69). El objetivo se centra, pues, en aclarar el alcance que puede llegar a tener la responsabilidad del socio cooperativista teniendo en cuenta que se trata de un tema muy sensible por las repercusiones que puede llegar a tener en el patrimonio personal de los socios cooperativistas.

En este sentido, debemos comenzar distinguiendo, la responsabilidad del socio frente a terceros por las deudas de la cooperativa o responsabilidad externa y la responsabilidad por pérdidas¹⁹ del socio frente a la sociedad o responsabilidad interna. Respecto a la primera de ellas o responsabilidad por deudas, el art.56.1 de la ley vasca de cooperativas establece que los socios no responderán personalmente de las deudas sociales quedando su responsabilidad por dichas deudas limitada a las aportaciones al capital social que hubieran suscrito²⁰. Es decir, será la propia cooperativa quien hará frente a las deudas que se hubieran generado con terceros con todo su patrimonio (art. 1911 CC) no respondiendo los socios en ningún caso personalmente por dichas deudas²¹. Así la responsabilidad de los socios por las deudas frente a terceros se halla limitada a la aportación, comprendiéndose dentro de ellas tanto las aportaciones obligatorias como las volunta-

tivismo (La situación española actual)", *C.I.R.I.E.C.*, nº 5, 1988, pp. 165 y ss; CASTAÑO-GONZÁLEZ, *Manual de constitución y funcionamiento de cooperativas*, Barcelona, 1996; CELAYA, A., "Sociedad cooperativa de trabajo y sociedad anónima laboral. Configuración societaria comparada", *RDM*, 1989, pp. 115 y ss.

19. MARÍN SÁNCHEZ/MARÍ-VIDAL/SEGUI-MAS/MATEOS-RONCO, "Las pérdidas en las cooperativas: análisis de la legislación sustantiva, contable y fiscal" en BATALLER GRAU, J. (Dir.), *Pérdidas, disolución y concurso en sociedades cooperativas*, pp.15 y ss.

20. LARRAÑAGA, J. en PAZ N. (Dir.), *Glosa a la Ley de Cooperativas de Euskadi*, Vitoria-Gasteiz, 1999, pp.222-224.

21. Sobre el panorama legislativo actual del Derecho cooperativo español en este ámbito, vid. GADEA, E., SACRISTÁN F., VARGAS VASSEROT, C., *Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI*, Madrid, 2009, pp. 173 y ss.

rias²². En este sentido la responsabilidad de los socios cooperativistas respecto a las deudas contraídas con terceros se asemeja al régimen previsto en las sociedades anónimas y limitadas²³.

No obstante conviene precisar que la entrada en concurso de la cooperativa puede tener repercusiones patrimoniales en los socios en los casos en que se haya diferido el desembolso de la aportación. Hay que recordar que el socio responde por las deudas de la sociedad únicamente con el capital social suscrito si bien esta responsabilidad se extiende tanto a las aportaciones desembolsadas como a aquellas otras que se hayan diferido en el tiempo y que todavía no hayan sido satisfechas. Pues bien, la entrada en concurso de la cooperativa provoca que dichas aportaciones del socio cooperativista no desembolsadas entren a formar parte de la masa activa del concurso y que ya no deban ser desembolsadas en los plazos establecidos en los estatutos o acordados por los administradores sino que, de acuerdo al art. 48.4 LC, será la administración concursal la encargada de realizar la reclamación a los socios en el momento en que estime conveniente²⁴.

Finalmente y respecto a la responsabilidad por deudas conviene recordar también que el socio que haya causado baja de la cooperativa vasca no responderá por las deudas contraídas por la cooperativa con anterioridad a su baja, una vez que se haya fijado el importe de las aportaciones a rembolsar (art. 56.2) a diferencia de la previsión de la ley estatal donde los socios que hayan causado baja responderán personalmente por las deudas sociales, previa exclusión del haber social, durante cinco años desde la pérdida de su condición de socio, por las obligaciones contraídas por la cooperativa con anterioridad a su baja, hasta el importe reembolsado de sus aportaciones al capital social” (art. 15, pr. 3 y 4)²⁵.

De lo anteriormente expuesto queda claro que el socio cooperativista no responderá por las deudas de la sociedad frente a terceros pero, no obstante,

22. FAJARDO GARCÍA, “Las aportaciones voluntarias a capital social ante la reforma de la legislación cooperativa”, *CIRIEC-España: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 13, 1993, pp.51 y ss.; GADEA, E., SACRISTÁN F., VARGAS VASSEROT, C., *Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI*, pp.350-353; BROSETA/MARTÍNEZ SANZ, *Manual de Derecho Mercantil*, I, Madrid, 2012, p. 650.

23. La introducción de esta norma pretende establecer con claridad que se deroga la anterior disposición que permitía que los estatutos establecieran si la responsabilidad del socio era o no limitada.

24. GRIMALDOS GARÍA, MI, “El concurso de la cooperativa y su repercusión en el patrimonio personal de los socios”, *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, pp.323 y ss.

25. DUQUE DOMÍNGUEZ, J., “La baja obligatoria del socio”, *Revesco*, 1988-1989, pp.13 y ss.

conviene diferenciar la responsabilidad por deudas de la responsabilidad por pérdidas. En este sentido, mientras la responsabilidad por deudas alude a los compromisos asumidos por la sociedad con los terceros la responsabilidad por pérdidas del socio se refiere a una situación interna de la sociedad cooperativa que implica que si los resultados del ejercicio económico son negativos, es decir, si la diferencia entre ingresos y gastos de la sociedad arroja pérdidas, estas pérdidas se pueden imputar al patrimonio del socio. Y, en ese caso, el socio deberá responder ilimitadamente frente a la cooperativa por las cantidades así imputadas²⁶.

La imputación de pérdidas supone un sistema de saneamiento empresarial característico de las cooperativas²⁷. Los socios participan en la actividad cooperativizada generando un intercambio de prestaciones patrimoniales entre la sociedad y el socio que puede dar lugar a unos excedentes en los que el socio participa pero también unas pérdidas para la sociedad que el socio deberá asumir²⁸.

De esta manera y centrándonos en la ley vasca de cooperativas, su artículo 69 establece con carácter general la posibilidad de imputar las pérdidas al socio cooperativista²⁹. Así dispone que los estatutos deberán fijar los criterios para la compensación de las pérdidas, siendo válido imputarlas a una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros resultados positivos, dentro del plazo máximo de cinco años. En este caso, las pérdidas quedarían por el momento sin sanear y sin imputarlas directamente a los socios, es decir, se reconoce la posibilidad de diferir en el tiempo la imputación de pérdidas.

26. Sobre la responsabilidad ilimitada o limitada del socio respecto a la imputación por pérdidas véase el apartado 4.2

27. ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M., “El concurso de acreedores de la cooperativa”, *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, pp.115-132; FAJARDO GARCÍA, “La imputación de pérdidas en la cooperativa”, en AAVV, *La participación de los socios trabajadores en los resultados de la cooperativa*, Oñate, 2003; ÍDEM, *La gestión económica de la cooperativas: responsabilidad de los socios*, Madrid, 1997, pp.197 y ss.

28. PANIAGUA ZURERA, M., “La determinación y la distribución de los resultados del ejercicio económico en la Sociedad Cooperativa: propuestas de armonización legislativa”, p. 223; GADEA, E., SACRISTÁN F., VARGAS VASSEROT, C., *Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI*, p.172; VITERI ZUBIA, I., “Incidencia de la liquidación concursal de la cooperativa en la sociedad de gananciales”, *Actualidad Civil*, 2014 (en prensa).

29. LARRAÑAGA, J. en PAZ N. (Dir.), *Glosa a la Ley de Cooperativas de Euskadi*, pp.264-266.

Posteriormente establece las reglas para la imputación de pérdidas si queremos imputarlas desde el primer momento. Así, establece que la cuantía de las pérdidas que no se compense con fondos de reserva voluntarios ni con el fondo de reserva obligatorio se deberá imputar a los socios que las generaron en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa. La asamblea general, por tanto, será la encargada de imputar las pérdidas a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa.

Una vez individualizadas las pérdidas la ley vasca establece también los modos en los que se pueden satisfacer. Así, se puede: i) satisfacer directamente mediante una aportación monetaria, o deducciones en sus aportaciones al capital social, o bien minorando cualquier inversión financiera del socio en la cooperativa dentro del ejercicio siguiente a aquel en que se hubieran producido; ii) satisfacer con cargo a los posibles retornos que correspondieran al socio en los cinco años siguientes. Y finaliza diciendo que “si quedasen pérdidas sin compensar, éstas deberán ser satisfechas por el socio en el plazo máximo de un mes”³⁰.

Por tanto, la ley reconoce la posibilidad de imputar las pérdidas a los socios cooperativistas siendo la asamblea general la encargada de individualizar dichas pérdidas. Ello significa que las pérdidas que hayan sido individualizadas pero todavía no han sido satisfechas por parte del socio cooperativistas podrán formar parte de la masa activa del concurso³¹ (art.76.1 LC) y se podrá exigir al socio su pago por parte de los administradores concursales.

No obstante, y con ocasión del concurso de acreedores de Fagor ha surgido la cuestión de que al no existir acuerdo de imputación de pérdidas de la asamblea general previa al concurso de acreedores ésta resultaba inexigible para los socios. Pues bien, esta afirmación debe ser matizada en el sentido de entender de que en el caso de que existan pérdidas imputables a los socios pero cuya cuantía no haya sido todavía individualizada antes de la fecha de declaración del concurso no puede mantenerse que deba ser la asamblea general la encargada de imputar las pérdidas ya que bastaría que la asamblea no se pronunciara sobre ello para que

30. GADEA, E., SACRISTÁN F., VARGAS VASSEROT, C., *Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI*, p.508 y ss.

31. GRIMALDOS GARÍA, MI, “El concurso de la cooperativa y su repercusión en el patrimonio personal de los socios”, pp.323y ss.

los socios quedarán exonerados de tal obligación. En este caso, ha de entenderse que serán los administradores concursales los encargados de dicha tarea³².

4.2. Responsabilidad limitada o ilimitada

De lo anteriormente expuesto se deduce la posibilidad de imputar pérdidas al socio cooperativista si bien la duda se plantea si el socio debe responder por dichas deudas de forma limitada a la aportación al capital o si su responsabilidad es ilimitada debiendo responder personalmente más allá de esta aportación al capital. La ley vasca no establece expresamente, si la responsabilidad por pérdidas se limita o no a las aportaciones al capital o si los socios deben responder incluso en el caso de que ésta supere el valor de sus aportaciones lo que ha dado lugar a varias interpretaciones sobre el alcance de la responsabilidad por pérdidas. Se trata, no obstante, de un tema de gran importancia toda vez que de los argumentos esbozados a favor de una u otra interpretación dependerá el impacto que sobre el patrimonio personal de los socios cooperativistas puede generarse en una situación de concurso como la que se desarrolla actualmente.

De esta manera, partiendo del art.69 de la ley vasca de cooperativas cabe interpretarlo en el sentido de que una vez individualizada por la asamblea la cuantía de la imputación de pérdidas el socio deberá responder por dicha cuantía de forma ilimitada, de acuerdo al 1911CC, aunque ello supere la aportación social desde el momento en que la ley no lo limita expresamente. Además, los socios deberán responder sea cual fuere la procedencia de las pérdidas, es decir, responderán tanto por las pérdidas cooperativas, extracooperativas y extraordinarias. Y ello desde el momento en que la ley vasca no distingue entre los distintos tipos de resultados, pérdidas o beneficios cooperativos, extracooperativos y extraordinarios ni les otorga, en consecuencia, un régimen diferenciado en lo referente a la distribución de los excedentes³³ estableciendo la posibilidad de que los socios

32. GRIMALDOS GARCÍA, M.I., “El concurso de la cooperativa y su repercusión en el patrimonio personal de los socios”, *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, pp.323-343.

33. Las pérdidas cooperativas serán aquellas generadas por los socios en el desarrollo de la actividad cooperativizada; las pérdidas extracooperativas las derivadas de operaciones con terceros; y las pérdidas extraordinarias derivadas de actividades de operaciones ajenas a la actividad cooperativizada. Vid. MORILLAS JARILLO, M.J./FELIÚ REY, M.I., *Curso de Cooperativas*, Edit. Tecnos, Madrid, pp 426-429; FAJARDO GARCÍA, I.G., *La gestión económica de la cooperativa: responsabilidad de los socios*, Edit. Tecnos, Madrid, 1997, pp.120-154; GADEA, E., *Derecho de las Cooperativas. Análisis de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas del País Vasco*, Bilbao, 1999, p. 225.

participen en el reparto de los mismos mediante el retorno o, en su caso, la dotación de reservas disponibles³⁴ (art. 66). En consecuencia a este planteamiento se considera que los socios también deben participar en el reparto de los resultados negativos sea cual fuere su procedencia lo que determina que responderán por todo tipo de pérdidas de la cooperativa independiente de su origen³⁵ lo que sin duda agrava de manera notable la responsabilidad del socio en estos casos³⁶.

De esta manera, declarado el concurso el crédito por imputación de pérdidas que aún no ha sido satisfecho pasará a formar parte de la masa activa del concurso (art. 76.1 LC) siendo la administración concursal la encargada de exigir el pago al socio cooperativista abierta la fase de liquidación concursal. Y ello porque es obligación de la administración concursal la de conservar la masa activa del modo más conveniente para los intereses del concurso (art. 43.1 LC) lo que supone que debe exigir los créditos que la sociedad disponga contra los socios por imputación de pérdidas y que no han sido satisfechas³⁷.

Sin embargo y teniendo en cuenta el fundamento que lleva a imputar las pérdidas a los socios se han defendido también otras posturas. De esta manera, la imputación de pérdidas se ha fundamentado tradicionalmente en la participación del socio en la actividad cooperativizada, en consonancia con el carácter

34. Sobre la distribución de excedentes y/o beneficios, GADEA, E., SACRISTÁN F., VARGAS VASSEROT, C., *Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI*, pp.488 y ss; GADEA, E., *Derecho de las Cooperativas. Análisis de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas del País Vasco*, pp. 219 y ss.

35. SUSO VIDAL, JM., “La imputación de pérdidas al socio en la liquidación concursal de la cooperativa”, *Estudios sobre la Ley concursal, Libro homenaje a Manuel Olivencia*, tomo V, pp.4847 y ss.

36. En este sentido tampoco el art. 59 LGC, siguiendo al legislador vasco, distingue a efectos de imputación entre los distintos tipos de pérdidas por lo que al socio se le imputarán las pérdidas cooperativas, extracooperativas y las extraordinarias, vid. SUSO VIDAL, JM., “La imputación de pérdidas al socio en la liquidación concursal de la cooperativa”, p. 4860; VITERI ZUBIA, I., “Incidencia de la liquidación concursal de la cooperativa en la sociedad de gananciales”, *Actualidad Civil*, 2014 (en prensa). No obstante, algunas leyes autonómicas han limitado expresamente la responsabilidad de los socios por las pérdidas sociales entre las que destacamos a la LCCV que dispone en su art. 69.3 que “si los estatutos lo establecen, las pérdidas derivadas de la actividad cooperativizada con los socios que se imputen a éstos, alcanzarán como máximo el importe total de los anticipos asignados a los socios en el ejercicio económico, más sus aportaciones al capital social y su participación en las reservas repartibles “. También la Ley de Cooperativas de Cantabria de 2013 que en su art. 72. 2 establece que “ las pérdidas se imputarán al socio hasta el límite de sus aportaciones al capital social”.

37. SUSO VIDAL, JM., “La imputación de pérdidas al socio en la liquidación concursal de la cooperativa”, *Estudios sobre la Ley concursal, Libro homenaje a Manuel Olivencia*, p. 4864.

cooperativo del tipo social, que hace que en caso de pérdidas éste deba asumirlas. Así, se ha mantenido también que, aunque la ley no lo establezca expresamente, la responsabilidad ilimitada debe corresponderse únicamente con las pérdidas cooperativas al tratarse estrictamente de las únicas deudas del socio. Así, se defiende que las pérdidas extracooperativas y las extraordinarias no tienen la consideración de pérdidas del socio y, por tanto, no puede predicarse la responsabilidad ilimitada del socio sino que responderán por ellas pero de manera limitada a la aportación³⁸.

E incluso se ha defendido que la responsabilidad limitada debe predicarse no únicamente de las pérdidas extracooperativas y extraordinarias sino que también de las pérdidas cooperativas aunque la ley no lo establezca expresamente. Y ello desde el momento en que la responsabilidad ilimitada por las pérdidas que se predica resulta incompatible con la declaración legal de responsabilidad limitada a la aportación social que se realiza en el art 56 y que de llevarla hasta sus últimas consecuencias se dejaría sin contenido la responsabilidad limitada que se predica en el art. 56³⁹. Por ello, desde otro sector doctrinal se entiende que los socios deben responder limitadamente por las pérdidas, sea cual fuere el origen de las mismas, únicamente hasta la cuantía de la aportación al capital⁴⁰.

38. Para un desarrollo más amplio de las distintas posturas, FAJARDO GARCÍA, I.G., “La masa activa y pasiva del concurso de cooperativas”, en *Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia*, t.V, Madrid, pp. 5235 y ss; PANIAGUA ZURERA, M., “La determinación y la distribución de los resultados del ejercicio económico en la Sociedad Cooperativa: propuestas de armonización legislativa”, *RdS*, 24, 2005, pp. 226 y ss; GRIMALDOS GARCÍA, M.I., “El concurso de la cooperativa y su repercusión en el patrimonio personal de los socios”, *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, nº 11, 2009, pp.323; ENCISO ALONSO MUÑUMER, M., “El concurso de acreedores de la cooperativa”, *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, nº 19, 2013.

39. No obstante, el sistema de responsabilidad ilimitada por pérdidas que se le impone al socio cooperativista no resulta contradictorio con el sistema de responsabilidad limitada frente a terceros. Se trata de dos cuestiones distintas. Más ampliamente, PANIAGUA ZURERA, M., “La determinación y la distribución de los resultados del ejercicio económico en la Sociedad Cooperativa: propuestas de armonización legislativa”, p. 204 y ss.

40. GRIMALDOS GARCÍA, M.I., “El concurso de la cooperativa y su repercusión en el patrimonio personal de los socios”, *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, pp.323-343; VILLAFANEZ PÉREZ, I., “Concurso de la cooperativa y consecuencias en las relaciones jurídicas con sus socios”, Tesis Doctoral inédita, Defendida en la Facultad de Derecho de San Sebastián EHU-UPV en julio 2013. Cuestión distinta sería que en casos de insolvencia pueda plantearse responsabilidades por infracapitalización, PAZ ARES, “Sobre la infracapitalización de sociedades”, *ADC*, 1983, pp. 262 y ss; en el ámbito cooperativo, PASTOR SEMPERE, C., *Los recursos propios en las sociedades cooperativas*, Madrid, 2002, pp. 136 y ss.

4.3. Las aportaciones financieras subordinadas Fagor

4.3.1. Características y normativa aplicable

Por otra parte, la entrada en concurso de Fagor Electrodomésticos S.Coop, ha provocado un conflicto social con las denominadas aportaciones financieras subordinadas, similares a las participaciones preferentes⁴¹, desde que numerosas personas han denunciado las condiciones de este producto financiero y han solicitado la devolución de las cantidades invertidas. En este sentido, la entrada en concurso de Fagor hace que resulte muy difícil recuperar el dinero a sus titulares por el carácter subordinado de este producto financiero.

Aunque presentan similitudes con las participaciones preferentes de las cajas de ahorro⁴² el concreto régimen jurídico de estas aportaciones financieras subordinadas se encuentra en el artículo 57.5 de Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi de acuerdo con la redacción dada a la misma por la Ley 1/2000 de 29 de junio. Mediante esta reforma el legislador vasco permitió la emisión de este producto financiero como medio para financiar la cooperativa con la consideración de capital social (art.57.5). En este sentido, las cooperativas al igual que las cajas de ahorro, no pueden emitir acciones como medio de financiación por lo que las aportaciones financieras subordinadas son el mecanismo utilizado por las cooperativas para poder financiarse con la consideración de recurso propio⁴³.

41. Sobre esta materia, FERNÁNDEZ DEL POZO, L., *Las participaciones preferentes. Un híbrido financiero supletorio del capital social*, Cizur Menor, 2005; FERRANDO VILLALBA, L., “Las participaciones preferentes: regulación, caracteres y protección de los clientes bancarios”, en *Participaciones Preferentes: ¿se puede recuperar el dinero invertido? Prácticas bancarias y protección del consumidor (Doctrina, jurisprudencia, soluciones y formularios)*, Cizur Menor, 2012, pp.15 y ss.; MAYORGA TOLEDANO, M.C., “El problema de las participaciones preferentes: déficit regulatorio o apariencia de protección”, en *Participaciones Preferentes: ¿se puede recuperar el dinero invertido? Prácticas bancarias y protección del consumidor (Doctrina, jurisprudencia, soluciones y formularios)*, Cizur Menor, 2012, pp. 61 y ss.

42. Presentando grandes similitudes con las participaciones preferentes la principal diferencia consiste en que siendo en ambos casos la remuneración variable las aportaciones financieras subordinadas no están condicionadas a la obtención de beneficios lo que implica que no hayan dejado de pagar los cupones correspondientes. Otra de las diferencias que presenta con las participaciones preferentes es que en ellas el emisor y el comercializador es el mismo mientras que en el caso de las aportaciones financieras subordinadas el emisor y el comercializador son distintos desde el momento en que han sido emitidas por las sociedades cooperativas Eroski y Fagor y comercializado por varias entidades financieras aportaciones financieras subordinadas.

43. ARREGI, Z., “La financiación de las cooperativas en el marco legal español: especial referencia al art. 57.5 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi”, *Informe Asesoría Jurídica de MCC*, 2004.

La introducción de las aportaciones financieras subordinadas se debe, en parte, al cambio de criterio de las Normas Internacionales de Contabilidad, y fundamentalmente por la NIC 32 (adoptada por el Reglamento núm. 2237/2004 de la Comisión, de 29 de diciembre de 2004)⁴⁴ que determinaban que el capital de las cooperativas no se contabilizara como recurso propio, ya que el derecho del socio al reembolso en caso de baja no resulta compatible con el carácter de recurso propio⁴⁵. En este sentido, se establecía un cambio en la manera en que tradicionalmente se ha contabilizado el capital social que pasa de ser recurso propio de la sociedad a tener que serlo como pasivo exigible determinado por la obligación de reembolso que tiene la sociedad en caso de baja del socio. Es en este contexto donde adquieren interés la emisión de aportaciones financieras subordinadas por parte de las cooperativas porque además de formar parte del capital social pueden garantizar el carácter de recurso propio en base a las Normas Internacionales de Contabilidad siempre que, entre otras cuestiones, no se otorgue un derecho de rescate anticipado a sus titulares⁴⁶.

Estas aportaciones financieras subordinadas forman parte de los denominados híbridos financieros⁴⁷ y se caracterizan por su i) consideración de capital social

44. También debe tenerse en cuenta la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. Para un desarrollo más amplio del tema nos remitimos a GIMENO RIBES, M., “La paradoja del balance de las cooperativas: cuando los fondos propios son ajenos y los ajenos son propios (En torno a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 22 de febrero de 2012) *RdS*, Nº 40, 2013, p. 475-476; PASTOR SEMPERE, C., “Efectos jurídico-societarios tras la entrada en vigor de la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas (BOE de 29 de diciembre de 2010). ¿Podemos seguir considerando el capital social como elemento integrante del patrimonio neto contable?”, *RdS*, nº 36, 2011, pp.387-399.

45. Más ampliamente, GADEA, E., SACRISTÁN F., VARGAS VASSEROT, C., *Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI*, pp. 382 y ss.

46. Vid. GIMENO RIBES, M., “La paradoja del balance de las cooperativas: cuando los fondos propios son ajenos y los ajenos son propios (En torno a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 22 de febrero de 2012), *RdS*, Nº 40, 2013, pp. 463-48; ARREGI, Z., “La financiación de las cooperativas en el marco legal español: especial referencia al art. 57.5 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi”, *Informe Asesoría Jurídica de MCC*, 2004. Sobre instrumentos financieros cooperativos, vid. PASTOR SEMPERE, C., *Los recursos propios en las sociedades cooperativas*, 283 y ss.

47. Sobre los híbridos financieros, FERNÁNDEZ DEL POZO, L., *Las participaciones preferentes. Un híbrido financiero supletorio del capital social*, pp. 47 y ss.

cuando su vencimiento sea perpetuo, es decir, cuando su vencimiento no tiene lugar hasta la liquidación de la cooperativa, aunque existe la posibilidad de que el emisor, en este caso Fagor, pueda amortizar la emisión anticipadamente, de forma total o parcial, una vez transcurrido un periodo mínimo de 5 años desde la fecha de desembolso. No obstante, esa posible amortización anticipada derivará exclusivamente de la voluntad de las entidades emisoras; ii) carácter subordinado lo que implica que, en caso de concurso, se sitúan a efectos de prelación de créditos detrás de todos los acreedores ordinarios y solo por delante de los socios (art. 92.2 y 158 LC y art. 57.7 LPV) lo que dificulta de manera notable la recuperación de la inversión realizada⁴⁸; iii) estas aportaciones tienen una retribución que podrá ser fija, variable o participativa y se representan por medio de títulos o anotaciones en cuenta, que podrán tener la consideración de valores mobiliarios si así se prevé en el acuerdo de emisión, en cuyo caso su régimen jurídico se ajustará a la normativa aplicable a estos activos financieros; iv) estas aportaciones en ningún caso atribuyen derechos de voto en la Asamblea General ni de participación en el órgano de administración; v) estas aportaciones han sido suscritas tanto por socios y trabajadores asalariados de la cooperativa como por terceros desde del momento en que la normativa exige que la emisión o contratación de estas aportaciones deba ser ofrecida, en cuantía no inferior al 50 por ciento, a los socios y trabajadores asalariados de la cooperativa antes de ofrecerse a terceros.

El carácter subordinado que presenta este producto financiero es lo que determina que, en un caso de concurso como el actual, se dificulte de manera notable la recuperación de la inversión realizada por parte de los inversores. Y ello desde el momento que su carácter subordinado hace que en caso de concurso se sitúen a efectos de prelación de créditos detrás de todos los acreedores ordinarios y solo por delante de los socios (art. 92.2 y 158 LC y art. 57.7 LPV)⁴⁹.

48. Con carácter general véase ALONSO LEDESMA, C., "Delimitación de la masa pasiva: las clases de créditos y su graduación" en *Derecho concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003 para la reforma concursal*, Madrid, 2003, pp.357 y ss; "La reforma en materia de subordinación crediticia", *R.D.C.P.*, núm.11, 2009, pp.59 y ss; "Créditos contra la masa, comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos", *R.D.C.P.*, núm.14, 2011, pp. 41 y ss.

49. En caso de concurso se considera también que sus titulares no cobran antes que los socios sino en las mismas condiciones que éstos al tener las aportaciones financieras subordinadas la consideración de capital social en caso de liquidación. No obstante, si bien estas financiaciones serían capital social en sentido económico sus titulares no adquieren por ello la condición de socio sino que tendrían la consideración de acreedores atención a sus derechos y obligaciones. Al tener la consideración de capital social

Ello ha provocado que muchos de los inversores de estas aportaciones financieras subordinadas se pregunten sobre la posibilidad que tendrán de recuperar su inversión. Por ello, teniendo en cuenta la dificultad de recuperar la inversión en una situación concursal conviene analizar si la recuperación de la inversión puede venir a través de otras vías, en concreto analizando si se han respetado en la comercialización de estos productos los deberes de información que se imponen a las entidades comercializadoras.

Para poder abordar esta cuestión y, sobre todo, analizar si se han respetado los deberes de información necesarios en la comercialización de estos productos debemos tener en cuenta que, de acuerdo a las características analizadas anteriormente, las aportaciones financieras subordinadas son un producto financiero complejo y de alto riesgo y, por ello, cobran especial importancia las normas que imponen deberes de información a las entidades comercializadoras de estos productos. En concreto, esto se produjo de manera clara en el año 2007 en el que se aprobó la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley del Mercado de Valores y mediante la que se traspuso al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID). Los artículos 78 y ss LMV suponen una novedad en las relaciones con los clientes e inversores en ámbitos como la intensidad de la obligación de informar que pesa sobre las entidades comercializadoras o los principios que deben regir la actuación de estas entidades en la relación con sus clientes. De esta manera, se ha profundizado en la protección de los intereses de los clientes precisando las obligaciones de las entidades comercializadoras. Entre estos deberes, se encuentra aquel en el que las entidades se ven obligadas a clasificar a sus clientes en función de sus conocimientos financieros. De esta manera, antes de la celebración del contrato las entidades financieras deben asegurarse de los conocimientos, experiencia financiera y objetivos perseguidos por el cliente, mediante una evaluación de conveniencia o idoneidad (test de conveniencia). Así, la ley distingue entre clientes

deberían reembolsarse en el mismo plano que las aportaciones al capital o antes de proceder al reembolso de las aportaciones al capital pero siempre después de haber satisfecho la totalidad de los créditos de la cooperativa, incluidos los subordinados. En todo caso, no pasarán a formar parte de la masa pasiva. Ver PASTOR SEMPERE, C., “Capítulo III. El régimen económico: principales aspectos”, en AAVV (Coord. Alonso Espinosa, f.j.), *La sociedad cooperativa en la ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas*, Comares, Granada, 2011, p.127.

profesionales y clientes minoristas, y establece cautelas y obligaciones en función del diferente perfil del cliente. En este sentido, se intensifica la obligación de informar en el caso del inversor minorista o no profesional a quien se debe informar de manera adecuada sobre el instrumento financiero contratado y los posibles riesgos inherentes a la operación.

No obstante, toda esta normativa protectora del inversor (MiFID) que se ha aprobado a partir del año 2007 no estaba vigente en el momento de la emisión y comercialización de muchas de las aportaciones financieras subordinadas Fagor⁵⁰, si bien la normativa vigente entonces es clara también en el sentido de que todos los inversores deberían haber sido bien informados de las características de estos productos. El derogado Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, imponía el deber de proporcionar toda la información relevante para que los inversores conformasen su voluntad con pleno conocimiento. Así, regulaba en su artículo 16 el deber de información sobre las operaciones realizadas y precisaba que *“dicha información deberá ser clara, concreta y de fácil comprensión para los clientes.”* En el anexo de esta disposición, se recogía un código general de conducta de los mercados de valores, en cuyo art. 5.3 se señalaba que: *“La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos.”*⁵¹

50. Se realizaron dos emisiones registradas en la CNMV entre 2003 y 2006.

51. Además, en su condición de consumidor también resulta de aplicación toda la normativa en materia de consumidores y usuarios, en concreto el art. 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que *“antes de contratar el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular, sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo”*.

4.3.2. Remedios jurídicos

Como ya hemos venido adelantando, la entrada en concurso de acreedores de Fagor dificulta de manera notable la recuperación de la inversión realizada en aportaciones financieras subordinadas desde el momento que el carácter subordinado de este producto hace que en caso de concurso como éste se sitúen a efectos de prelación de créditos detrás de todos los acreedores ordinarios y solo por delante de los socios (art. 92.2 y 158 LC y art. 57.7 LPV). Ello ha provocado que muchos de los inversores de estas aportaciones financieras subordinadas se pregunten sobre la posibilidad que tendrán de recuperar su inversión.

Para afrontar este problema debemos tener presente que las aportaciones financieras subordinadas Fagor son un producto financiero perfectamente legal y autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores pero no es menos cierto que, en la mayor parte de los casos, la comercialización de estas aportaciones financieras por algunas entidades financieras se ha realizado sin haberles proporcionado una información adecuada sobre sus características y ofreciendo a los consumidores un producto financiero de elevada complejidad y alto riesgo como si se tratara de un simple depósito a plazo. La emisión de estas aportaciones financieras implicaba el conocimiento de que el inversor se encontraba ante un producto complejo perpetuo, sin plazo de vencimiento, sin liquidez en el mercado y con una rentabilidad condicionada a la existencia de beneficios. No obstante, las personas afectadas que suscribieron las aportaciones subordinadas denuncian que la información que les fue facilitada incidía en la rentabilidad de la inversión, en su carácter temporal y en la posibilidad de recuperar el dinero de una manera sencilla en un breve período de tiempo desde que se realizaba la solicitud de venta. No obstante, al tratar de recuperar su inversión han tenido conocimiento de que el producto adquirido tiene la consideración de financiación subordinada, cuyo vencimiento no va a tener lugar hasta que, en su caso, se liquide la sociedad en la que se ha invertido. Lo que consideraban que eran inversiones seguras y recuperables han resultado ser unos productos de ahorro e inversión complejos, de alto riesgo y que no pueden ser rescatados en cualquier momento⁵².

52. Véase la Resolución del Ararteko de 12 de junio de 2013, por la que se da respuesta a las quejas sobre comercialización de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor.

En este sentido, la comercialización de las aportaciones financieras presenta similitudes con las participaciones preferentes en el sentido de que tratándose de productos financieros complejos han sido comercializados entre inversores minoristas que en muchas ocasiones no tienen conocimientos suficientes para comprenderlos y que los adquirieron confiando en el buen hacer de las entidades de crédito que se los ofrecieron.

Esta supuesta mala comercialización de este producto financiero puede dar lugar, en un primer momento, a la imposición de sanciones administrativas a las entidades comercializadoras por parte de los organismos supervisores. En este sentido, la CNMV⁵³, junto con el Banco de España, son los organismos encargados de revisar la comercialización de estos productos financieros con el objeto de verificar la adecuada aplicación de la normativa de evaluación previa de los conocimientos y experiencia de los clientes. En este sentido, cuando la CNMV detecta situaciones de incumplimiento puede incoar un expediente por mala comercialización de estos productos contra las entidades financieras correspondientes. No obstante, la tramitación de este expediente por parte de la CNMV finaliza, en su caso, con la imposición de sanciones administrativas pero no supone la indemnización por los perjuicios económicos sufridos. Para ello, el inversor deberá acudir a los tribunales y reclamar los daños judicialmente contra las entidades comercializadoras por el eventual incumplimiento de su obligación de informar⁵⁴ en el caso de que consideremos que éstas no han ofrecido una información completa, pertinente, precisa sobre este producto financiero complejos y de alto riesgo al igual que lo están haciendo algunos de los afectados por los problemas de las preferentes de la banca⁵⁵. Y para ello deberán optar por alguno de los remedios jurídico privados que el Derecho reconoce y a los que en las siguientes líneas nos referiremos.

53. www.cnmv.es

54. FERRANDO VILLALBA, L., "El deber general de informar de las entidades de crédito", en ORDUÑA MORENO, F.J. (Dir.), *Contratación y servicio financiero*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000, pp.169 y ss.; ALONSO ESPINOSA, F., "Participaciones preferentes y clientes minoristas de entidades de crédito", *Diario La Ley*, núm. 7875, Sección Doctrina, 7 de junio 2012, pp.8 y ss.

55. En relación a las participaciones preferentes pero aplicable también al supuesto de las aportaciones financieras subordinadas, GUERRERO, C., "Las acciones y participaciones preferentes: acciones judiciales y estrategias de defensa" en *Participaciones Preferentes: ¿se puede recuperar el dinero invertido? Prácticas bancarias y protección del consumidor (Doctrina, jurisprudencia, soluciones y formularios)*, Cizur Menor, 2012, pp.49 y ss.

De los diferentes remedios jurídico-privados, en la mayoría de los supuestos de reclamaciones ante los tribunales se ha optado por solicitar la anulación del contrato de adquisición de las aportaciones financieras subordinadas desde el momento en que el consentimiento de las partes fue prestado de forma errónea, al desconocer las características y el objeto de las órdenes de compra suscritas como consecuencia de la falta de información ofrecida por parte de las entidades⁵⁶. Así, desde el punto de vista del Derecho de los contratos se puede instar la nulidad del contrato de adquisición de las aportaciones financieras por vicios en el consentimiento provocado por error o dolo (art. 1300 CC)⁵⁷ recuperando el capital invertido y, solicitando, si concurren los presupuestos una indemnización de daños y perjuicios. En este caso la acción caduca a los cuatro años desde la suscripción de las acciones⁵⁸.

Existirá error, si la falta de información o la información proporcionada sobre las aportaciones financieras subordinadas provocan en el inversor una falsa representación sobre los elementos esenciales de dicho producto que le lleva a suscribir las aportaciones financieras subordinadas. Para que este error vicie el consentimiento es necesario que recaiga sobre los elementos esenciales de la inversión entendiéndose a estos efectos como elementos esenciales el carácter complejo y de

56. En este sentido, respecto a las participaciones preferentes, con las que las aportaciones financieras subordinadas guardan una gran relación vid. SJ1ºI (15) de Zaragoza, de 9 de septiembre 2009 (AC 2012,451); SAP Murcia, de 1 de abril de 2011 (AC 1983). STS (Sala Civil) núm.244/2013, de 18 de abril, RJ (2013/3387); SAP Granada (Sección 4º), núm. 318/2013, de 4 de octubre AC (2013/2008); SAP Islas Baleares (Sección 3º), núm. 291/2013, de 17 de julio; SAP Madrid (Sección 25), núm. 239/2013, de 24 de mayo JUR (2013/215035); SAP Islas Baleares (Sección 5º), núm. 514(2012, de 3 de diciembre; SAP Alicante (Sección 4), núm. 377/2012, de 27 de septiembre (AC 2012/1919); SAP Valladolid (Sección 1), núm. 243/2012, de 27 de septiembre AC 2012/2148; SAP Madrid (Sección 10), núm. 428/2012, de 26 de junio AC 2012/465; SJ1ºInst. Gasteiz (núm. 5), núm. 72/2013, de 26 de marzo AC 2013/737.

57. En este sentido en la STS de 21 de noviembre de 2012 se fijan unas pautas para analizar la concurrencia del vicio de consentimiento. En concreto en su fundamento jurídico cuarto establece que “...hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta - sentencias 114/1985, de 18 de febrero , 295/1994, de 29 de marzo , 756/1996, de 28 de septiembre , 434/1997, de 21 de mayo , 695/2010, de 12 de noviembre , entre muchas -. Es decir, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea...”.

58. Además de la anulación del negocio por vicios en el consentimiento también se suele instar la nulidad de algunas condiciones generales y la declaración como engañosa de determinada publicidad. A modo de ejemplo, la SJMercantil nº 1 de Bilbao, núm. 20/2014, de 27 de enero de 2014.

alto riesgo del producto o su vencimiento entre otros (art. 1266CC) y que además sea excusable, es decir, que no haya podido evitarse con una diligencia media. En otras ocasiones, el vicio del consentimiento puede deberse a una actuación dolosa de las entidades comercializadoras. En estos casos se entendería que concurre dolo cuando la entidad comercializadora actuara con propósito de engañar y mediante palabras o maquinaciones insidiosas indujera al inversor, a celebrar un contrato que de otra forma no lo hubiera celebrado (art.1269 CC). En estos casos de dolo se puede solicitar también la anulación del negocio en base a los art. 1300 y ss CC si el dolo es grave o reclamar una indemnización de daños y perjuicios en caso de que el dolo sea incidental (1270 CC).

En este punto surge la cuestión de la carga de la prueba en torno a la información recibida sobre las características de las aportaciones financieras subordinadas. En este sentido, el hecho de que la legislación establezca deberes de información hacia las entidades comercializadoras determina que se invierta la carga de la prueba de acuerdo al art.217.7 LECIV y que la carga de la prueba de la existencia de una información suficiente y veraz deba recaer sobre la entidad financiera respecto de la cual la diligencia exigible no es la genérica de un buen padre de familia, sino la específica del ordenado empresario y representante leal⁵⁹.

De esta manera, se pueden apreciar fallos judiciales recientes en materia de aportaciones financieras subordinadas que acreditan que la comercialización de dicho producto se ha llevado incumpliendo los deberes de información que la legislación impone a las entidades financieras comercializadoras produciéndose casos de información insuficiente o deficiente llegando, en algunos casos, a abusar de la confianza de algunas personas sin conocimientos ni experiencia necesarias para comprender el riesgo inherente al producto⁶⁰. Entre todas ellas, destacamos la reciente Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao , nº 20/2014, de 27 de enero que estima una demanda de ADICAE contra BBVA en la que se solicitaba la nulidad de los contratos por los que 71 consumidores habían adquirido “aportaciones financieras subordinadas de Eroski” (AFSE) además de la

59. SAP Valencia, de 12 de julio del 2012 (3458/2012).

60. En este sentido se manifiestan la SAP Álava (Sección 1º), núm. 351/2013, de 10 de octubre AC 2013/1856; SAP Valladolid (Sección 3º), núm. 211/2013, de 5 de septiembre AC 2013/1674; S1ºInst. Bergara (nº3), núm. 48/2013, de 30 de julio 2013 y la reciente SJMercantil nº1 de Bilbao, nº 20/2014, de 27 de enero de 2014 .

nulidad de determinadas condiciones generales y la declaración como engañosa de determinada publicidad⁶¹.

En estas decisiones judiciales, más protectoras de los intereses de los inversores, ha adquirido gran relevancia el perfil del inversor: una persona inexperta, con un carácter conservador en sus inversiones, con desconocimiento en la materia y que no está al corriente de la gran cantidad de productos existentes en el mercado⁶².

61. La sentencia establece que *“Los clientes del banco piden que se anule la compra de las AFSE porque, según dicen, no se les dio información suficiente sobre el producto que adquirirían. La entidad bancaria comercializadora sostiene, en cambio, que ofreció información completa sobre las características del producto. Planteado en estos términos el pleito, le hubiese bastado al banco con aportar un contrato por escrito, firmado por los demandantes, donde se recogiesen con la suficiente claridad las características del producto que compraban, incluidos sus riesgos. De esta forma, los adquirentes hubiesen quedado obligados a cumplir lo firmado y a asumir las consecuencias del error en el que hubiesen podido incurrir (art. 1091 CC). Pero, por sus intereses comerciales, la entidad financiera elige otra forma de colocación de este “producto complejo” de inversión entre sus clientes minoristas (consistente en la información verbal de los comerciales del banco y firma de la “orden de compra” por los clientes, con ausencia de un contrato escrito de adquisición del producto donde conste de forma comprensible sus condiciones). Siendo así, debe cargar con la prueba de acreditar que la información que estaba obligada a dar sobre las características de la inversión que ofrecía a sus clientes fue la correcta, en particular sobre los aspectos menos ventajosos de la inversión, y soportar las consecuencias jurídicas desfavorables derivadas de las dudas que recaigan sobre la falta de acreditación de dicha circunstancia”*. Debe declararse la nulidad de los contratos por vicio del consentimiento (arts. 1265 y 1300 CC). Porque *“Los demandantes en modo alguno pudieron formar adecuadamente su voluntad contractual al carecer de los elementos sensibles e imprescindibles para poder conocer el alcance del negocio jurídico que les era ofrecido, sin que tal defecto les sea reprochable pues se limitaron a asentir a la oferta que les proponían los empleados de la sucursal”* (SAP de Pontevedra de 04.04.13). Y así, el consentimiento prestado está viciado por el error, que recae sobre una de las características principales del producto, *“porque la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta... es decir, la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea”* (STS 21.11.2012). Este error, es relevante, ya que recae sobre la característica principal del producto, la posibilidad de recuperación de los ahorros invertidos, y no es imputable a los clientes, sino a la entidad financiera demandada, que estaba legalmente obligada, ya desde la primera redacción del art. 79 Ley del Mercado Valores, a suministrar información suficiente, comprensible y adecuada a sus clientes en atención a su eventual decisión en materia inversora (STS 12.11.04 y la citada SAP Pontevedra de 04.11.13).

62. En este sentido se pronuncian las SAP Álava 22.6.2011 (AC 854); SJ1º Instancia nº 1 de Cambados de 10.7.2012 (AC 456); SJ1º Instancia nº 10 de Pontevedra, 24.9.2010 (AC 458); SJ1º Instancia nº 5 de Valencia de 13.6.2012 (AC 461); SJ1º Instancia nº 1 de Bilbao de 19.11.2010 (AC 462).

5. Conclusión

La apertura del concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos ha provocado una gran preocupación en Euskadi y, en concreto, en el entorno de la población de Mondragón, donde se ubican principalmente las empresas cooperativas de la Corporación (MCC). En este trabajo se han intentado describir y analizar algunos aspectos que se han considerado de especial relevancia como es la posible repercusión que sobre el patrimonio de los socios cooperativistas y adquirentes de las aportaciones financieras subordinadas puede acarrear la entrada en concurso de la entidad. Junto con esta finalidad principal hemos considerado también de interés contextualizar la situación desde el momento que afecta a una cooperativa y lo que ello supone en cuanto a modelo de gestión socialmente responsable. En este sentido, nos hemos referido también al futuro al que se enfrenta el cooperativismo vasco cuando asume la estructura de una multinacional, en cuyo marco se hace necesario aunar los principios tradicionales del cooperativismo con los retos que la globalización económica plantea.

Bibliografía

- ALONSO ESPINOSA, F., “Participaciones preferentes y clientes minoristas de entidades de crédito”, *Diario La Ley*, núm. 7875, Sección Doctrina, 7 de junio 2012.
- ALONSO LEDESMA, C., “Delimitación de la masa pasiva: las clases de créditos y su graduación”, en *Derecho concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003 para la reforma concursal*, Madrid, 2003; ÍDEM “La reforma en materia de subordinación crediticia”, *R.D.C.P.*, núm.11, 2009; “Créditos contra la masa, comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos”, *R.D.C.P.*, núm.14, 2011.
- ARREGI, Z., “La financiación de las cooperativas en el marco legal español: especial referencia al art. 57.5 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi”, *Informe Asesoría Jurídica de MCC*, 2004.
- BATALLER GRAU, J. (Dir.), *Pérdidas, disolución y concurso en sociedades cooperativas*, Madrid, 2012.
- BRADLEY, K./GELB A., *Cooperativas en marcha*, Barcelona 1985
- BROSETA/MARTÍNEZ SANZ, *Manual de Derecho Mercantil*, I, Madrid, 2012.
- CABALLER MELLADO, V., “Reflexiones en torno al cooperativismo (La situación española actual)”, *C.I.R.I.E.C.*, nº 5, 1988.
- CASTAÑO-GONZÁLEZ, *Manual de constitución y funcionamiento de cooperativas*, Barcelona, 1996.
- CELAYA, A., “Sociedad cooperativa de trabajo y sociedad anónima laboral. Configuración societaria comparada”, *RDM*, 1989.
- CSCE-EKGK: *Historia del Consejo superior de cooperativas de Euskadi: 1983-2009*. Recuperado de http://www.csce-ekgk.coop/galeria/CSCE%20CAST_3nov.pdf.
- DIVAR GARTEIZAURRECOA, J., *Régimen jurídico de las sociedades cooperativas*, Bilbao, 1987; ÍDEM, “El cooperativismo y la economía social en el País Vasco”, *CIRIEC-España: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 0, 1987.
- DUQUE DOMÍNGUEZ, J., “La baja obligatoria del socio”, *Revesco*, 1988-1989.

- EMBED IRUJO, *Concentración de empresas y Derecho de cooperativas*, Murcia, 1991; IDEM, “La integración cooperativa y su tratamiento en la Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi”, *Estudios de Derecho Mercantil homenaje al Profesor Justino Duque Domínguez*, I, Valladolid, 1998.
- ENCISO ALONSO MUÑUMER, M., “El concurso de acreedores de la cooperativa”, *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, nº 19, 2013.
- ERRASTI, A: “Euskal Dragoiak Erdiko Erresuman: Mondragon Taldeko Multinazionalak Txinan”, *Uztaro* nº 84, 2013.
- ERRASTI AMOZARRAIN, A.M: Modelos de empresa multinacional democrática o cooperativa”, *Cuadernos de Gestión* vol. 4, nº 2, 2004.
- ERRASTI, A.M, HERAS, I; ELGOIBAR, P y BEGIRISTAIN, A: “La internacionalización de las Cooperativas y su responsabilidad social”, *Revista de Dirección y Administración de Empresas* nº 10, 2002.
- FAJARDO GARCÍA, I.G., “La masa activa y pasiva del concurso de cooperativas”, en *Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia*, t.V, Madrid; ÍDEM, “Las aportaciones voluntarias a capital social ante la reforma de la legislación cooperativa”, *CIRIEC-España: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, nº 13, 1993; ÍDEM, “La imputación de pérdidas en la cooperativa”, en AAVV, *La participación de los socios trabajadores en los resultados de la cooperativa*, Oñate, 2003; ÍDEM, *La gestión económica de la cooperativas: responsabilidad de los socios*, Madrid, 1997.
- FERNÁNDEZ DEL POZO, L., *Las participaciones preferentes. Un híbrido financiero supletorio del capital social*, Cizur Menor, 2005.
- FERRANDO VILLALBA, L., “Las participaciones preferentes: regulación, caracteres y protección de los clientes bancarios”, en *Participaciones Preferentes: ¿se puede recuperar el dinero invertido? Prácticas bancarias y protección del consumidor (Doctrina, jurisprudencia, soluciones y formularios)*, Cizur Menor, 2012, pp.15 y ss.; ÍDEM. “El deber general de informar de las entidades de crédito”, en ORDUÑA MORENO, F.J. (Dir.), *Contratación y servicio financiero*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000.
- GADEA, E., *Derecho de las Cooperativas. Análisis de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas del País Vasco*, Bilbao, 1999.
- GADEA, E./ SACRISTAN F./ VARGAS VASSEROT, C. (Dirs.), *Régimen jurídico de la sociedad cooperativa del siglo XXI*, Madrid, 2009

- GARATE, J.I; LAFUENTE, J.L; MADINAGOITIA, J.L y SINDE, J.M: “Respuestas cooperativas a un escenario de crisis: el caso de la Corporación de Mondragón”, *Revista de Contabilidad y Dirección*, vol. 11, 2010.
- GIMENO RIBES, M., “La paradoja del balance de las cooperativas cuando los fondos propios son ajenos y los ajenos son propios. En torno a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 22 de febrero de 2012”, *RdS*, Nº 36, 2011
- GOMORRO, I., *Experiencia cooperativa en el País Vasco*, 1975, Bilbao.
- GUERRERO, C., “Las acciones y participaciones preferentes: acciones judiciales y estrategias de defensa”, en *Participaciones Preferentes: ¿se puede recuperar el dinero invertido? Prácticas bancarias y protección del consumidor (Doctrina, jurisprudencia, soluciones y formularios)*, Cizur Menor, 2012.
- GRIMALDOS GARCÍA, M.I., “El concurso de la cooperativa y su repercusión en el patrimonio personal de los socios”, *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, nº 11, 2009.
- INNOBASQUE: INNOBASQUE (Agencia Vasca de la Innovación): *RSE y Competitividad en Euskadi. Una aproximación desde la innovación social*, Innobasque ed., Zamudio, 2011
- LUZARRAGA, J.M e IRIZAR, I: La estrategia de multilocalización internacional de la Corporación de Mondragón, *Ekonomiaz* nº 79, 2012.
- MARÍN SÁNCHEZ/MARÍ-VIDAL/SEGUI-MAS/MATEOS-RONCO, “Las pérdidas en las cooperativas: análisis de la legislación sustantiva, contable y fiscal”, en BATALLER GRAU, J. (Dir.), *Pérdidas, disolución y concurso en sociedades cooperativas*.
- MAYORGA TOLEDANO, M.C., “El problema de las participaciones preferentes: déficit regulatorio o apariencia de protección”, *Participaciones Preferentes: ¿se puede recuperar el dinero invertido? Prácticas bancarias y protección del consumidor (Doctrina, jurisprudencia, soluciones y formularios)*, Cizur Menor, 2012.
- MENDIZABAL ETXABE, A; BEGIRISTAIN ZUBILLAGA, A y ERRASTI AMOZARRAIN, A: “Deslocalizaciones y empleo cooperativo. El caso de Fagor Electrodomésticos, S. Coop”, *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y cooperativa* nº 52, 2005.
- MENDIZABAL, A; ERRASTI, A y ETXEZARRETA, E: “Lekualdatzeak eta enplegu kooperatiboa Fagor Elektrotresnak E. Koop.-ren ataka”, *Uztaro* nº 57, 2006.

- MOLINA, F., *Fagor Electrodomésticos. Historia de una experiencia cooperativa*, Mondragón, 2006
- MORENO, F.J. (Dir.), *Contratación y servicio financiero*, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000.
- MORILLAS JARILLO, M.J/ FELÍU REY, M.I: *Curso de cooperativas*, Madrid, 2002.
- PANIAGUA ZURERA, M., “La determinación y la distribución de los resultados del ejercicio económico en la Sociedad Cooperativa: propuestas de armonización legislativa”, *RdS*, 24, 2005.
- PASTOR SEMPERE, C., *Los recursos propios en las sociedades cooperativas*, Madrid, 2002; ÍDEM “Capítulo III. El régimen económico: principales aspectos”, AAVV (Coord. Alonso Espinosa, f.j.), *La sociedad cooperativa en la ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas*, Comares, Granada, 2011; ÍDEM “Efectos jurídico-societarios tras la entrada en vigor de la Orde EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas (BOE de 29 de diciembre de 2010) ¿Podemos seguir considerando el capital social como elemento integrante del patrimonio neto contable?”, *RdS*, nº36, 2011.
- PAZ CANALEJO (Dir.), *Glosa a la Ley de Cooperativas de Euskadi*, Vitoria-Gasteiz, 1999
- PENDAS DÍAZ, B. y otros, *Manual de Derecho cooperativo*, Madrid, 1987.
- SUSO VIDAL, JM., “La imputación de pérdidas al socio en la liquidación concursal de la cooperativa”, *Estudios sobre la Ley concursal, Libro homenaje a Manuel Olivencia*, tomo V, Madrid.
- THOMAS, H./LOGAN, C., *Mondragón. Un análisis económico*, Madrid, 1991
- URDANGARIN, C: “Internacionalización de Mondragónn Corporación Cooperativa”, *Ekonomiaz* nº 44, 1999, pp. 238-255 y CLAMP, C: “The Evolution of Management in the Mondragon Cooperatives” *Mapping Cooperative Studies in the Millenium*, University of Victoria, Victoria, 2003.
- VILLAFANEZ PÉREZ, I., “Concurso de la cooperativa y consecuencias en las relaciones jurídicas con sus socios”, *Tesis Doctoral inédita*, Defendida en la Facultad de Derecho de San Sebastián EHU-UPV en julio 2013.